


Spring 4-3-2017

Gubernamentalidad Espacial y Agencia Criminal Negra en Cali y São Paulo: Aproximaciones para una Antropología 'Fuera de la Ley.'

Jaime Alves

How does access to this work benefit you? Let us know!

Follow this and additional works at: https://academicworks.cuny.edu/si_pubs

 Part of the [African American Studies Commons](#), and the [Feminist, Gender, and Sexuality Studies Commons](#)

Recommended Citation

Alves, Jaime Amparo. 2017. Gubernamentalidad Espacial y Agencia Criminal Negra en Cali y São Paulo: Aproximaciones para una Antropología 'Fuera de la Ley.'. En: Jorge Giraldo Ramirez. Territorios y Sociabilidades, Universidad Eafit, 2016, pp.16-71.

This Article is brought to you for free and open access by the College of Staten Island at CUNY Academic Works. It has been accepted for inclusion in Publications and Research by an authorized administrator of CUNY Academic Works. For more information, please contact AcademicWorks@cuny.edu.

Gubernamentalidad Espacial y Agencia Criminal Negra en Cali y São Paulo: *Aproximaciones para una antropología “fuera de la ley”*¹

Jaime Amparo Alves²

-
- 1 El material etnográfico utilizado en este capítulo es parte de la investigación “Geografías Racializadas de la Violencia en Cali y São Paulo” realizada entre 2012 y 2014 y financiada por Droga, Seguridad y Democracia/Social Science Research Council (DSD-SSRC) y integrada a el grupo de investigaciones “Interseccionalidades: raza, género y violencia en el espacio urbano de Cali y São Paulo” del CEAF/Universidad Icesi. Agradezco a Aurora Vergara, Jeronimo Botero, Inge Valencia, Enrique Caporali, Vicenta Moreno, Andrea Moreno, Brenda Ramos, Cristina Hurtado, Bladimir Caraballi, Ofir Muñoz, Dembay Morna y Marisol Rivera por sus comentarios y sugerencias en un primer borrador.
 - 2 Profesor del Departamento de Sociología y Antropología de CSI/City University of New York. Investigador Asociado del Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi. Email: amparoalves@gmail.com

Introducción

La presente reflexión plantea algunas hipótesis interpretativas de una investigación en curso sobre racismo y gobernanza urbana en São Paulo/Brasil y Santiago de Cali/Colombia. Este capítulo es una invitación a profundizar en algunas cuestiones que considero relevantes no sólo desde el punto de vista teórico, sino también por su urgencia política. La base para mi reflexión es trabajo etnográfico realizado en “El Fundão” en el Distrito de Jardim Angela (2009-2010), en la zona sur de São Paulo, y en El Guayacán, un barrio de nombre ficticio en la comuna 13 del Distrito de Aguablanca, en Cali (2013-2014)³. Mi mirada es condicionada (y limitada) por mi propia experiencia como hombre, afrodescendiente, ex-habitante de favela

3 Los nombres de individuos y localidades (El Fundão y El Guayacán) son ficticios. Para escala geográficas más amplias (Aguablanca y Jardim Angela) he optado por mantener los nombres reales.

y por un posicionamiento político que reivindica la academia como espacio estratégico para la visibilización de los procesos de dominación y resistencia. Más bien, a partir de una perspectiva de la investigación comprometida (Hale 2008; Speed, 2006; también Fals-Borda 1986), dejo explícita una agenda política que busca visibilizar una cierta economía de la muerte, producida por el Estado en sus interfaces de dominación por raza, clase y pertenencia territorial. Este capítulo está organizado en cuatro apartados. Primero, presento encuentros etnográficos en los contextos de la violencia urbana en São Paulo y Cali, después ofrezco algunas categorías conceptuales a partir de las contribuciones propuestas por Michael Foucault. Entonces, invito al lector a considerar algunas formas alternativas de resistencia urbana, a partir del concepto de “agencia trágica”. Finalmente, propongo una agenda de investigación que cuestione el “lugar” desde donde hemos teorizado sobre el orden urbano, la criminalidad y la resistencia.

Observación: En los últimos años este artículo ha se beneficiado de las discusiones presentadas en el seminario internacional Territorios y Sociabilidades Violentas realizado en marzo de 2014 en la Universidad Eafit, y de los talleres urbanos organizados por el grupo de investigaciones Interseccionalidades, del Centro de Estudios Afrodiaspóricos CEAF/Universidad Icesi. La presente versión expone una síntesis del material etnográfico y de las elaboraciones teóricas originalmente publicadas en el artículo “Blood in Reasoning: state violence, contested territory and black criminal agency in São Paulo” en *Journal of Latin American Studies* 48(1): 61-87; en el artículo “From Necropolis to Blackpolis: necropolitical governance and black spatial praxis in São Paulo, Brazil. *Antipode*, 46(2), 323-339” y en “Refusing to Be Governed: State

Delinquency, Gang Violence and the Politics of Un-governability in an Afro-Colombian Shantytown, (manuscrito).” El argumento presentado aquí es parte de una investigación en proceso y no intenta hacer afirmaciones categóricas sobre las realidades complejas de Cali y São Paulo, tampoco generalizar contextos etnográficos como El Guayacán. Pido disculpas de antemano por las omisiones y simplificaciones que los lectores puedan encontrar. La versión impresa no ha sido editada.

Violencias en dos momentos

Escenario uno:

Los dos policías pasaban en la motocicleta, dieron la vuelta y se detuvieron frente al taller de cerrajería donde acostumbrábamos a *parchar* yo y los miembros de La Quinta, (la pandilla de El Guayacán). Víctor se negó a entregarles su carnet de identidad y empezó a gritarles: - no van a meterse en mi taller. ¿Tienen un orden judicial? Los policías lo empujaron de lado y comenzaron la búsqueda de una supuesta pistola. Los vecinos se acercaron al taller; mujeres, niños y personas mayores empezaron gritar: !Aguacates! ¡Abusadores! ¡Ignorantes!. Algunos les lanzaron piedras, otros filmaban sus acciones con sus teléfonos celulares. Atascados en la pared, los policías pidieron ayuda por el radio, rápidamente dos colegas más llegaron y forzaron el paso a través de la multitud. Rescataron a los otros agentes y salieron en medio de piedras y malas palabras.

Escenario dos:

Betinho venía del trabajo cuando la patrulla de la policía le hizo un señal para que parara. Dos policia apuntaron las

armas a su rostro, le pidieron la cédula, le hicieron una requisita y lo subieron a la patrulla. Los huesos de Betinho fueron encontrados dos años más tarde en un cementerio clandestino. El fue enterrado como indigente y hasta hoy su madre, Doña María, sigue su agonía sin fin por los laberintos de la burocracia estatal, reclamando el traslado de los restos mortales de su hijo para hacer un funeral.

En los últimos años realicé visitas semanales a la cárcel, participado en reuniones mensuales de rendición de cuentas de la policía comunitaria, “parchado” con los pandilleros en las “ollas”, entrevistado a las madres de los jóvenes negros asesinados por la policía o por otros jóvenes en las guerras sin fin entre pandillas. A lo largo de mi experiencia etnográfica, he tenido la “oportunidad” de escuchar varios relatos de horror, como por ejemplo las prácticas de “Los Matadores”, el escuadrón de la muerte compuesto por policías en la zona sur de São Paulo. Tal como lo he señalado en trabajo anterior, lejos de ser un hecho aislado, el asesinato de jóvenes como Betinho hace parte de un modelo de *gobernanza necropolítico* que convierte el cuerpo negro y las zonas marginales de las ciudades en el blanco del poder soberano. Además del desmembramiento de las víctimas, los asesinos los queman, entierran en cementerios clandestinos o los desechan en los vertederos para que después resurjan como huesos. A estas dinámicas he llamado como espacialidades macabras o *patrón mórbido de gobernanza espacial*.

En esta economía de la muerte, el Estado se toma el poder de hacer y deshacer identidades: los cuerpos negros son producidos en los discursos policivos como insignias del mal, después se convierten en des-hechos en las prácticas macabras

de desmembramientos. En estos encuentros mortales entre las fuerzas del Estado y los “favelados”, las favelas también son racialmente producidas como topografías de la maldad; es decir, la favela es constituida en una relación de dominación espacio-racial que produce algunos cuerpos y territorios como inherentemente peligrosos y por lo tanto *matables*. La favela es, entonces, uno de estos espacios de alteridad (como las haciendas del periodo colonial, la cocina de las élites contemporáneas, la ciudad misma) donde la “raza” se convierte en una “verdad” política; una estrategia de dominación. Si uno quiere saber quién es negro o blanco en Brasil, pregúntale a la policía. Mientras que la violencia de la policía es un aspecto central de la dominación racial en nuestras ciudades construidas como comunidades racialmente imaginadas, la gente negra y pobre también desarrolla estrategias de resistencia frente a la delincuencia estatal. Como el escenario uno testifica, los residentes y jóvenes de los “parches” de Aguablanca no son víctimas pasivas de la violencia estatal. En muchos casos hacen recocha de los enfrentamientos con los policías. No raras veces he escuchado relatos de policías reclamando a “los incivilizados” del Distrito, de que no “respetan la autoridad”. Abundan también relatos de agresiones físicas: un oficial discapacitado por alguien que tiró una piedra en su cabeza, una mujer que lanzó un balde de orine al rostro de otro cuando éste golpeaba a su puerta, un chico amenazando a un tercer oficial con un palo para no dejar que se lleve a su madre...

Si aceptamos la invitación de James Scott (1990) para considerar los actos difusos y espontáneos de resistencia no solamente como una arma de los débiles, sino también como diagnóstico de los espacios restrictivos para la acción política en contextos marcados por la brutalidad del poder, ¿Qué nos dicen estos actos

de enfrentamientos públicos entre comunidades históricamente marginadas y la policía, acerca de los límites de las estrategias estatales de gobernanza urbana en las áreas marginales de Cali y São Paulo en donde el estado está normalmente presente por medio de la delincuencia oficial? Al mismo tiempo, ¿Qué la instrumentalización de la muerte como estrategia de dominación territorial (como ilustra el escenario 2) sugiere sobre los límites y posibilidades de resistencia en algunas topografías racializadas de nuestras ciudades ¿Qué pasa con algunos cuerpos que por su alteridad racial no pueden ser gobernados; o mejor, sólo pueden ser gobernados por medio del espectáculo (soberano) de la muerte?

Con estas preguntas quiero interrogar las miradas “estadocéntricas” que han celebrado (y muchas veces pedido) más policías y más cárceles y así mismo las miradas más “progresistas” que han defendido los modelos de “policía comunitaria” y la llamada “seguridad ciudadana” (Arriagada y Godoy, 1999; PNUD, 2013; Mendoza 2013), como modelo de pacificación urbana. A pesar de la buena intención, estas aproximaciones parecen olvidarse que no es posible una seguridad “ciudadana” sin expandir los derechos sociales para una mayoría estructuralmente desplazada de la ciudadanía⁴.

En este capítulo, en vez de hacer énfasis en las estrategias estatales de seguridad, me interesa más analizar cómo las personas en estos territorios criminalizados desafían las fantasías de

4 Agradezco a Markus Gottsbacher, Enrique Caporali e Inge Valencia por algunas de estas reflexiones acerca de los límites del concepto de “seguridad ciudadana” en el seminario Seguridad y Gobernanza: retos para las políticas públicas. Universidad Ices, Abril 2013.

orden y paz urbana producidas por dichas políticas. Me interesa sobretodo analizar esta perspectiva a partir del concepto de *gubernamentalidad*. Tal como lo planteado por Foucault, dice respecto a un nuevo “arte de gobierno” que emergió a partir del siglo XVIII. Foucault identifica un gradual “cambio epistemológico” en el ejercicio del poder: Una transición del Estado de justicia de la Edad Media hacia el Estado administrativo del siglo XVI, y finalmente la “*gubernamentalización del Estado*” en el siglo XVIII. Esta “nueva técnica de gobierno”, en sus palabras, comprende una sociedad organizada bajo el cálculo político del riesgo y que tiene la población y el territorio como su blanco, y finalmente la economía política (y la policía) como forma principal de producción de conocimiento (Foucault, 2007, p.116). Dentro de esta nueva economía del poder, sostiene Foucault, las técnicas de dominación y control operan con una lógica completamente diferente: “Ahora es sobre la vida, a lo largo de su desarrollo, que el poder establece su dominio. [El poder moderno opera en] la descalificación gradual de la muerte “(p. 138).

No pretendo ser exhaustivo con este referencial teórico, pero es importante enfatizar la perspectiva puesta por los neo-foucaultianos, principalmente a partir de la relación entre *gubernamentalidad*, espacio y subjetividades. Autores como Nikolas Rose (1999) y Thomas Lemke (2001), entre otros, han llamado nuestra atención para “una nueva tecnología de formación de ciudadanía” (Rose, 1999, 191) que tiene como objetivo convertir a los individuos en agentes éticamente responsables por sí mismos y por sus comunidades. Estos autores sugieren que el nuevo “arte de gobernar” que Foucault anticipa en el siglo dieciocho, se ha desplazado en un “nuevo esquema de poder” que comprende

la autogestión de la vida, el cálculo del riesgo, la incitación pedagógica para participar en las *cruzadas cívico-morales en nombre de un bienestar colectivo con fines políticos muy bien definidos* (Rose, 1999, 135-88).

En América Latina, esto parece ser la apuesta de los modelos de seguridad urbana implantados en ciudades-laboratorios como Medellín, São Paulo, Cali, y más recientemente Río de Janeiro. En las últimas décadas, estas ciudades se han convertido en epicentro de nuevas tecnologías de *gobierno* basadas en la policía comunitaria por cuadrantes, los talleres de derechos humanos para los pobres y talleres de aprendizaje de oficio para los jóvenes de los sectores populares. Hay también las políticas anti-drogas en las escuelas, las campañas cívicas para que los vecinos reporten los crímenes... Estamos hablando de toda una parafernalia de discursos y prácticas para la disciplina espacial y el autogobierno de los pobres. Como se han notado en otros contextos urbanos (e.g., Wilson, 2004; Janoschaka, 2011; Vargas 2014), al mismo tiempo que los pobres son empujados fuera de la economía formal, estos barrios marginales se convierten en el blanco de nuevas estrategias espaciales de dominación que buscan controlar las geografías-problemas creadas por el *urbanismo neoliberal* (Theodore et al, 2009).

Considerada por las Naciones Unidas, en los años 90, como el sitio urbano más violento del mundo (Emplasa, 2010), el distrito de Jardim Angela en São Paulo, es un ejemplo de estas “nuevas” estrategias de gobernanza. Desde 1999 la Secretaria de Seguridad Pública de São Paulo ha convertido a Jardim Angela en el blanco de un ambicioso plan para reducir las tasas de homicidio que en el distrito llegaron a 130 muertes por cada 100,000 habitantes en

1994⁵. El barrio era el chivo expiatorio de la clasificación infame de São Paulo como una de las ciudades más violentas de América Latina – después de Medellín y Cali, esta última con una tasa promedio de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes en los años 90 (Observatorio Social, 2011)⁶. Las medidas estatales incluían el empleo de policías encubiertos, la policía comunitaria, el apoyo a los programas culturales/educativos de las ONGs, y la apuesta en los Consejos Comunitarios de Seguridad. Por otra parte, la policía empezaba un programa de presencia ostensiva en las escuelas, un toque de queda obligando a que los bares cerraran a las 10 pm y los “choques de orden” con puestos de control en áreas estratégicas de acceso a las favelas. Tanto los medios como los activistas de derechos humanos han celebrado Jardim Angela como un nuevo territorio de paz. Ahora el modelo se ha exportado para otras regiones de la ciudad (y de América Latina) y es ampliamente publicitado como una intervención estatal con éxito en la región más infame de la ciudad.

Después de las ollas de “limpiezas sociales” hechas por los escuadrones de la muerte en la década de 90, el Estado comenzó a adoptar un enfoque de derechos humanos, por lo menos en su apariencia (Caldera, 2000; Sinhoretto, 2002), copiando los modelos de policía de Canadá y Japón, mientras que también adaptaba el programa de Cero Tolerancia de los Estados Unidos.

5 O Estado de S. Paulo. O que cinco décadas de homicídios em São Paulo tem a ensinar? *Cidades*, p. 8-10. Disponible en <http://pt.braudel.org.br/noticias/arquivos/downloads/epidemia-5-decadas-de-homicidios.pdf> (acceso en 10 de mayo, 2013).

6 Ver también el informe “Dinámica Reciente de la Violencia en Cali”. Vicepresidencia de la República. Disponible en http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/Documents/2010/Estu_Regionales/cali.pdf

La base de la Policía Comunitaria de Jardim Angela fue creada en 1999 y desde entonces, ha recibido el reconocimiento internacional por la reducción de los homicidios en la región. En 2010, el modelo fue elegido como una de las cinco mejores estrategias policiales innovadoras del mundo por el National Policing Improvement Agency del Reino Unido. En 1999, el modelo japonés se puso a prueba y en 2005 la Policía Militar de São Paulo firmó un acuerdo con sus homólogos japoneses para implementar el modelo en todo el Estado. Hoy en día, la PM (Policía Militar) brinda capacitación a otros Estados brasileños y a otras fuerzas de policía en América Latina⁷.

Como en São Paulo, en Cali el Estado viene desde los años 90 desarrollando una serie de estrategias para reclamar el control territorial de las áreas de la ladera y oriente que han sido históricamente identificadas como las *geografías-problema* de la ciudad⁸. Aguablanca es una de estas ‘geografías del mal’ producidas por la imaginación racista de los caleños y reforzada en la prensa sensacionalista local (para una crítica, Venegas, 1998; Moncada 2010; Alves & vergara forthcoming). Con una población de aproximadamente 700,000 personas, el Distrito es una zona de ocupación relativamente reciente, sobretodo de

7 Para informaciones sobre el modelo implantado en São Paulo, ver “Policía Comunitaria”. Disponible en http://www.ssp.sp.gov.br/acoefs/acoefs_comunitario.aspx (acceso en 22 de Mayo, 2010). Ver también Mesquita, 1999; Caldeira, 2000 y Galdeano, 2009.

8 A pesar de que este capítulo no esté enfocado en las dinámicas históricas de la violencia en Colombia, es importante destacar la relación simbiótica entre la violencia urbana en Cali y el largo conflicto armado en el país (Venegas 1998, Guzmán y Camacho 1990). Su localización estratégica hace de Cali un epicentro de nuevas configuraciones criminales ahora bajo las Bacrim (Rodríguez y Ramírez 2013).

personas afrodescendientes oriundas del pacífico colombiano. De acuerdo con la Alcaldía de Cali, en esta zona vive aproximadamente el 70% de la población afrodescendiente de la ciudad (que es de 26% de acuerdo con DANE/2010). Por lo menos 60% de los residentes tienen el trabajo informal como la única fuente de ingresos. También, la pobreza, la deserción escolar, la mortalidad infantil y materna y el homicidio juvenil inciden de manera preferencial sobre la población de estos territorios (Urrea y Viafara, 2010; Urrea y Quintín, 2001)⁹. Sobre las tasas de homicidios juveniles es importante notar que de los 1.939 homicidios ocurridos en Cali en 2013, el 31% corresponde a 20 barrios de estratos uno y dos de la ciudad, donde se concentra la población negra. La comuna 13 (el sitio de mi investigación), por ejemplo, registró 215 homicidios en este período (Observatorio Social, 2014; también Urrea-Giraldo 2012).

La predominancia de los homicidios en las áreas geográficas de la ciudad donde hay la mayor concentración de los afrodescendientes nos permite hacer inferencias sobre los nexos entre raza, clase y espacio urbano en las dinámicas de la violencia urbana en Cali. El estado es actor político central en la producción de las geografías racializadas de la violencia en sus múltiples manifestaciones. Además de la violencia intrabarrrial entre jóvenes asociados a las pandillas locales, estas áreas han sido el blanco de las políticas represivas de seguridad urbana basadas en hiper-vigilancia-violencia policiva-encarcelamiento y en políticas más blandas de disciplina espacial como las acciones “pedagógicas” de ONGs, iglesias y fundaciones filantrópicas.

9 Ver también el Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali, 2011-2012.

Como los jóvenes son vistos como los únicos agentes de la violencia, los programas, de manera general, se han enfocado en la prevención de drogadicción y talleres de oficios para jóvenes ex - pandilleros. Programas como “Parce” (Desepaz) y “Cali Sin Pandillas” desarrollados en las dos últimas décadas por la Alcaldía de Santiago de Cali, son ejemplos de las tentativas - frustradas - de resocialización/reintegración de los jóvenes de las zonas marginales a la sociedad.

Otras acciones que remiten a las medidas de São Paulo incluyen el control de armas, la restricción de circulación de parrilleros, el control de alcohol, el cierre de centros nocturnos en horarios específicos, la recuperación de espacios públicos y el mejoramiento de la estructura de la policía (Observatorio Social 2011, Rodríguez y Ramírez 2013; Guerrero, 2003)¹⁰. Aunque muchas veces bien intencionadas, las acciones se basan, en general, en una concepción de la violencia urbana como una “cuestión cultural” o un “problema” de mal-adaptación/desajuste de algunos grupos sociales, sin una consideración del papel del Estado como agente de la violencia sócioespacial. Uno de los asesores de la Alcaldía de Cali me expresó su visión del “problema” en estos términos: “todo el problema en el Distrito de Aguablanca se debe a la mala formación de las familias, a la cultura de los padres que no saben cómo educar sus hijos. El

10 A pesar del Programa de Desarrollo, Seguridad y Paz (Desepaz), implementado por el alcalde Rodrigo Guerrero en 1993, haber sido una iniciativa con una perspectiva integrada sobre la violencia urbana, entendida a partir de múltiples factores (pobreza, desigualdades, acceso desigual a la justicia, etc.), uno de sus principales objetivos era la disciplina de los jóvenes de los barrios marginales y resocialización de los pandilleros. Bajo Desepaz, el Programa Parce involucró 1.400 jóvenes en actividades sicosociales para “resocializarlos (...) o para evitar que cayeran en el crimen” (Guerrero, 2003, p.13).

nivel de formación es muy débil, hay una cultura de la violencia que hace que los conflictos sean resueltos con agresividad, y hay la complicidad de muchos residentes con los agentes delincuenciales”. Él también me expresó su optimismo con los cambios de comportamientos: “hay gente buena en el sector (...) ayer, veinticinco personas fueron capturadas con ayuda de la gente Buena del barrio.”

Esta búsqueda por un *cambio* en el comportamiento y la producción de un sujeto urbano ideal - “gente buena” - conformada a un modelo “cívico” de gestión del orden puede ser identificada también en las nuevas estrategias del Plan Nacional de Vigilancia por Cuadrante, de la Policía Nacional de Colombia, desarrollado bajo la nueva Ley de seguridad ciudadana (Ley 1453/2011), la policía por cuadrantes es una de las estrategias del modelo de vigilancia comunitaria (VICOM) que según la Policía Nacional, busca mayor interacción entre policía y comunidad y generar una responsabilidad compartida en la gestión del orden en el nivel local (Policía Nacional, 2010, p.15). El cuadrante, definido como la unidad territorial básica con características geográficas y sociales homogéneas, hace parte de una supuestamente “nueva” cultura policiva que, como en Brasil, inaugura un paradigma de gobernanza urbana basado en el civismo, quiere decir, en la gestión policial colectiva de la ciudad. Como dice el comandante de la Policía en Cali para un periódico local: “de esa manera, estaremos más cerca de la comunidad y podremos reaccionar a tiempo contra los actos de la delincuencia común”¹¹. Por lo tanto,

11 Entrevista a *El País*, jueves, enero 3, 2013. Disponible en <http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/con-llegada-mil-policias-cali-tendra-cuadrantes-cada-sus-barrios>

analizados en conjunto con las otras estrategias de seguridad, los 329 cuadrantes de Cali¹² no son simplemente un marketing policial más: la invitación es a leerlos como parte de las estrategias de gubernamentalidad espacial en áreas cuyo Estado posee muy baja legitimidad.

Las nuevas estrategias de policía comunitaria deben ser contextualizadas también en la saturación de un modelo de policía basado simplemente en la fuerza bruta. Tanto en Cali como en São Paulo, las prácticas de limpieza social por agentes del Estado (Camacho y Guizado, 1990, Rojas, 1996, Sinhoretto 2002) han sido parte de una concepción de seguridad urbana basada en la eliminación de los perversos, enemigos del orden. Bajo la ideología neoliberal – que plantea la ciudad como espacio por excelencia de la multiculturalidad y de sujetos productivos – el espacio urbano no comporta estas prácticas explícitas de higienismo social. Ahora el deber del Estado y las Ongs es producir sujetos funcionales para el modelo de ciudadanía neoliberal. Cuando las pedagogías/disciplinas espaciales fallan (y ellas siempre encuentran sus límites en el cuerpo negro), las prácticas de limpieza social son camufladas sob el discurso de la “falta de adaptación cultural” o de la incapacidad de algunos individuos en participar de la vida cívica. En las siguientes páginas, no quiero sugerir que hay una sustitución de un modelo por otro – mano dura y “soft power”. Al contrario de lo que puede sugerir una lectura rápida de los dos escenarios en las primeras páginas de este capítulo, la violencia estatal en los territorios de las favelas paulistanas y los barrios marginales caleños no son tan distintas, tampoco pertenecen al pasado. Más bien se trata de

12 En la misma entrevista.

un *continuum de violencia* que engloba estrategias disciplinarias/ pedagógicas y necropolíticas. Lo que la parafernalia de discursos de “seguridad ciudadana” revela es un repertorio diversificado de prácticas policivas bajo un enfoque de derechos humanos que va mano a mano con un patrón histórico de brutalidad contra los pobres urbanos, y de mandera muy especial contra las gentes negras.

Para hacer frente a la delincuencia callejera, el nuevo método castiga pequeños delitos con prisión, transforma las geografías de la pobreza en zonas militarizadas, introduce los programas de formación en derechos humanos para sus tropas, los programas de formación de jóvenes para el mercado laboral, incentiva la participación de la comunidad, a la vez que la violencia policial y el encarcelamiento en masa crecen de manera inquietante : en São Paulo, entre 1995 y 2010, la población carcelaria creció un 210%, pasando de 65, 000 para aproximadamente 170,000 personas (Depen, 2010). Y la policía de São Paulo asesinó a unas 5.331 personas entre 1997 y 2007¹³. Con una tasa de letalidad de 5,5 civiles muertos por cada 100.000 habitantes, la policía de São Paulo mata más que todas las fuerzas policiales de los Estados Unidos juntas (HRWatch, 2009).

En Colombia a su vez, según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la población carcelaria registra un crecimiento promedio de 14% al año. Con 117,000 personas encarceladas – y con capacidad para 75,000 - el país es el tercero en el *ranking* de encarcelamiento después de Brasil y México. El

13 Sin embargo, la policía de São Paulo mata mucho más. Estos datos “oficiales” hacen parte de mi compilación propia en la Ouvidoria de Policia del Estado de São Paulo en 2010. Las Relatorías Anuales están disponibles en <http://www.ouvidoria-policia.sp.gov.br/pages/Relatorios.htm>

perfil de los presos colombianos no es distinto al de Brasil: 92% son hombres, 94% tiene entre 18 y 44 años de edad, 96% no tiene educación superior y 94% son reincidentes. Los datos sobre raza son precarios pero los afrocolombianos representan 44% de los presos caracterizados como “en condiciones excepcionales” (INPEC, 2013)¹⁴. Las tendencias raciales del estado penal son notadas también para Cali donde las tasas de encarcelamiento entre los negros es 469.95 per 100.000 personas mientras para los non-negros es 252.73 per 100.000 (Urrea-Giraldo 2012). Cali ha registrado una situación tan desesperada de hacinamiento que el personero municipal ha declarado una situación de crisis humanitaria en el sistema carcelario local. La cárcel de Villahermosa, el principal centro de detención de la región, tiene un hacinamiento de 350% (Personería Municipal, 2014). Aunque la violencia de la policía sea estadísticamente más visible en los procesos de detenciones presentados aquí – y aunque la policía colombiana sea numérica y cualitativamente distinta de su contraparte brasileña - la simbiosis entre fuerzas estatales y (los herederos d)el paramilitarismo (las Bacrim) no deja duda sobre la responsabilidad estatal en las dinámicas de los homicidios en el país (HRWatch, 2011).

En Cali, al paso en que la policía se presenta con un rostro amigo, abundan las denuncias de violaciones de derechos humanos por las fuerzas policiales en los barrios marginales.

14 Los datos del gobierno colombiano sugieren una subnotificación en la identidad étnico-racial de los presos. Según INPEC, los presos caracterizados bajo la categoría “afrocolombianidad” son 4,245, o 3,6% de la población carcelaria total. Los datos merecen ser leídos con cuidado, considerando – como en Brasil – el impacto de los discursos cotidianos sobre la negación de dichas categorías en las subnotificaciones estadísticas. Para un análisis crítico sobre las categorías raciales en el censo colombiano ver por ejemplo Morales (2010).

A lo largo de esta investigación, conté el asesinato de por lo menos de diez jóvenes en solamente un barrio del Distrito de Aguablanca. Aunque la policía no sea responsable por todas las muertes, agentes públicos sí están directamente vinculados a los conflictos barriales sea por medio del ofrecimiento de armas a grupos rivales o por medio de la represión letal. Han sido muchos los “momentos etnográficos” en que he escuchado relatos y presenciado encuentros violentos entre la policía y los jóvenes de El Guayacán. En uno de estos momentos, una de las lideresas del barrio y yo tuvimos que intervenir para que la policía no le golpeará a un joven negro que se resistía a la requisita. El joven argumentaba que la requisita era injustificada mientras el policial decía que estaba haciendo su trabajo. El joven de manera estratégica, gritaba para que los vecinos salieran a la calle y no permitieran que la policía se lo llevara. La estrategia funcionó. Argumentamos que no había justificativa para la requisita de alguien que estaba sin camisa y sentado en la puerta de su casa. La lideresa argumentó que no era la primera vez que los jóvenes reclamaban sobre las malas conductas de los policías y prometió quejarse con la Fiscalía. Los policiales se montaron en la moto, no antes de amenazar al joven, “nosotros nos vamos a ver otra vez, el mundo es pequeño”. Yo discutí el “evento” con algunos jóvenes de La Quinta¹⁵ días después en unos de nuestros

15 Apesar de La Quinta no se autodenominar “pandilla”, sus miembros se organizan en la defensa del territorio contra invasión por la pandilla rival y en el consumo de drogas ilícitas, mientras otros miembros individualmente hacen las “vueltas” o delitos callejeros. No todos los jóvenes de la Quinta participan en actos “delincuenciales”. Sus miembros reivindican la denominación “La Quinta” en oposición a La Zeta, la pandilla rival (los nombres son ficticios). Para una conceptualización de las pandillas, sus motivaciones y sus identidades territoriales ver Suarez (1998) y Ordoñez (2011).

encuentros, pero el asunto no los animó. Es que me decían que aquella era una situación “común y corriente”. Después de algún tiempo, Juan, uno de los miembros del *parche* empezó a hablar:

Juan: la policía es muy atrevida

Pablo: vienen acá a este barrio y le quita cualquier fierro a alguien y va por allá a cualquier otro barrio y lo vende, o sea, que en este...

Juan: ¿no se hace nada!

Diego: no se está haciendo nada, si supuestamente la autoridad debería de coger el arma y llevarla, llevarla pa'onde es ¿no?

Juan: donde es que se debe llevar, la estación y de ahí pa'llá, pues pa'onde se deba llevar, pero las cogen y van y las venden a otro lado, o sea que ahí no estamos haciendo nada porque mientras que unos, hablamos vos sabes de tin tan... en vez de hacer empeora, porque como le digo si ellos cogieran las armas y las guardaran donde es... no, pero ellos va y las venden. Es lo mismo, porque ¿entonces cuando se va acabar esto? Si los mis... si la misma policía cuando está pelada llega y quita un fierro y va y lo vende.

Jaime: ¿vende para otro?

Juan: a la otra banda, a la otra banda para que se meta pa'cá

Jaime: ¿entonces usted no para bolas a la policía? ¿No cree en la policía?

Juan: no.

Pablo: aquí usted los necesita y los llama y llegan vea...

Juan: hasta bala ya nos dimos con ellos.

Jaime: ¿sí? ¿Por qué?

Juan: porqueee el otro día acá había un entierro y ellos desde larga distancia, como son pistolas originales, nos prendieron y habían señoras y niños y todo y no les importó, entonces todo el mundo pensando que eran las liebres, se fue pues pa' la tal fon... pa' la tal frontera invisible y allá fue.

Pablo: eee, que pesar parece, uy ese peladito que tenía las manos parece llenas ya de cayos pa' trabajar pa' su hija, por... ya tenía una hija; ¡y lo mataron los policías! Acá la autoridad...

Juan: ni cigarrillo fumaba, ni cigarrillo y todos los días llegaba de trabajar construcción pa su hija y la hija ya estaba ¿no? Grandecita y todo y ¿ah? Pa' que un policía de estos lo venga a matar así; noooo.

Jaime: ¿y que hace... qué la gente hizo cuando la policía hizo esto?

Juan: ¿ahí en el momento? En el momento pasó fue queee, eeee... ya se nos habían acabado las balas, los tiros a nosotros ya no teníamos y teníamos un poco e' fierros sino que la ley acá como tiene dos y hay veces tres cargadores y hay veces andan con un fierro que no es de ellos, un fierro por aparte, nos prendieron, o sea, que ya todos veníamos corriendo pa'cá, pa'l velorio, cuando ahííí, un tiro de esos lo cogió a él, lo mató. Un peladito trabaja...

El extenso relato permite observar la persistencia de la brutalidad policiva bajo el mismo marketing del plan de policía comunitaria. Pedro, el joven negro asesinado por la policía, estaba en el velorio de David, su primo muerto supuestamente por un grupo pandillero rival, cuando dos patrulleros llegaron

para hacer una requisa a los jóvenes parchados en frente de la casa de David. Los jóvenes reaccionaron pidiendo respeto a la familia del “parcerito” y preguntando “¿Qué crimen estamos cometiendo en un velorio?” Hubo una pelea verbal, la policía le disparó a Pedro y lanzó balas de pimienta y gas lacrimógeno en el funeral. La balacera que se formó dejó más heridos mientras la familia de David y Pedro se esfacelaba en lágrimas y dolor. Confirma la versión de los jóvenes, el relato de Juana, una de las señoras presentes en el velorio:

Este desastre que hubo allí en esa cuadra, fue por la misma policía, ellos mismos amenazaron a los muchachos. Yo estaba allá metida en esa casa, sentada, estábamos terminado, íbamos a servir café, cuando la balacera, yo trate de salirme de allá y en eso un policía me lanzo una cosa de esas, bombas explosivas. Imagínes que ellos decían: vamos a traer una bomba de la estación y se la lanzamos a esa casa. Yo dije: Dios mío yo me quiero ir pa’ mi casa, eso estaba lleno de policía y yo que me asomo cuando bimm tiraban las petacas a la ventana, los mismos policías... Los muchachos de acá estaban lo más de tranquilos, le pusieron un disco (al joven que estaban velando), estaban escuchando, estaban llorando. Los mismos policías alborotaron a los muchachos para poderles dar, ahí fue donde mataron a ese pelaito.”

En Brasil, el contexto de los eventos megadeportivos ofrece otra oportunidad para entender esta metodología híbrida de gestión policial de la ciudad por medio de la muerte y de los discursos de seguridad ciudadana: en los últimos años el Estado brasileño ha invertido en una serie de políticas de derechos humanos como estrategias de ganar legitimidad en los territorios

en que su presencia ha sido tan solamente por medio de la fuerza punitiva. Al mismo tiempo, mientras que Brasil se preparaba para acoger el Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, las ciudades-sede como Rio de Janeiro, Salvador y São Paulo, fueron sometidas a procesos de guerra urbana que incluyen los desplazamientos, los asesinatos por la policía, las desapariciones y el encarcelamiento masivo de la población urbana pobre y negra¹⁶. Por supuesto estos procesos de gobernanza están vinculados a una economía política que convierte a las ciudades en áreas estratégicas para la reproducción capitalista, lo que David Harvey ha llamado la “acumulación por desposesión” (Harvey, 2008, p.34). Como en el mundial de 2010 en Sudáfrica, los eventos megadeportivos son una nueva oportunidad para remodelar las ciudades bajo lógicas raciales/policivas/mercantilistas de intervención en el espacio urbano (para el caso brasileño ver Vargas, 2014).

Desde el trágico día de 2007 cuando la FIFA anunció que Brasil iba a ser la sede del mundial, hasta el evento en 2014, fueron desplazados por lo menos 170 mil personas de las favelas. Es que los pobres estaban ubicados en áreas estratégicas para shopping centers, hoteles y expansión de las grandes avenidas. Este modelo de gobernanza es cada vez más global, no solamente desde un patrón generalizado de encarcelamiento masivo y muertes por la policía, sino también en los intercambios

16 Las violaciones de derechos humanos a lo largo de los preparativos para el mundial han sido largamente documentados. Por ejemplo: “Mega-eventos e violacao de direitos humanos no Brasil”. Articulacao Nacional dos Comites Populares da Copa. Disponible en <http://www.apublica.org/wp-content/uploads/2012/01/DossieViolacoesCopa.pdf> (Consultado en 10 de marzo, 2014).

militares-tecnológicos entre gobiernos de distintas partes del mundo. Dicha lógica puede ser identificada en la “pacificación” de las favelas en Rio de Janeiro que - según los documentos de WikiLeaks - se inspira en los modelos de contrainsurgencia desarrollados por EEUU en Irak y Afganistán¹⁷. También, el gobierno brasileño ha firmado acuerdo comercial con Israel para el uso de “drones” y otras tecnologías militares usadas contra los palestinos, en las estrategias de seguridad de las ciudades del Mundial. Otro ejemplo es la “Operación Orión”, de la Alcaldía de Medellín: con sus altísimos índices de homicidios en los años 90, la ciudad ha sido vendida en los medios de comunicación como modelo del nuevo orden urbano. El gobernador de Rio de Janeiro, Sergio Cabral, visitó Medellín en 2007 para establecer un intercambio en el área de seguridad urbana. En diciembre de 2013 el alcalde Aníbal Gaviria también visitó Rio de Janeiro para defender la experiencia implantada en la ciudad. En entrevista al principal semanal de Brasil, Gaviria vendió las pacificaciones en Medellín como una conquista de la sociedad y justificó el aumento de la violencia en los últimos años como la capacidad del crimen en ha aumentado en la ciudad: “como una bacteria, el crimen crea anticuerpos contra la acción del antibiótico”¹⁸. Mientras Medellín, São Paulo y Rio de Janeiro son ciudades globales “vendidas” en los anuncios publicitarios en Nueva York o en Paris como un puerto seguro para la circulación del capital,

17 Los documentos secretos todavía están disponibles en <http://riorealblog.com/2010/12/08/wikileaks-out-of-rio-de-janeiro-2009-pacification-report-from-consul/> (consultado en 05 de febrero de 2014).

18 Daniel Haidar. As lições de Medellín para as UPPs. Revista Veja. <http://veja.abril.com.br/brasil/as-licoes-de-medellin-para-as-upps/> (consultado en 05 de febrero, 2014).

el turismo de los “ciudadanos de bien”¹⁹, poblaciones locales son sometidas a las intervenciones terrocráticas del Estado. ¿Cómo quedan los no-ciudadanos dentro de este urbanismo sanitario? ¿Cómo quedan los negros en este régimen racializado de derecho a la ciudad?

Gobernanza Necropolítica

Las tecnologías de gobernanza urbana en las zonas marginales de Cali y São Paulo piden una problematización de estas estrategias más allá del paradigma foucaultiano de gubernamentalidad²⁰. Sugiero, entonces, un enfoque diferente para entender las estrategias contemporáneas de producción del orden urbano en contextos racializados, cuestionando: ¿Cómo gobernar algunas geografías urbanas cuya alteridad racial de sus habitantes las hacen indisciplinables / ingobernables o que aparentemente sólo pueden ser gobernadas por el espectáculo de la muerte (social, política, biológica)? Teniendo en cuenta el factor “raza”, ¿Cuál es el lugar del cuerpo negro en estas tecnologías de gobierno? Mi reflexión se fundamenta en el concepto de “necropolítica” propuesto por el filósofo Camerunés Achille

19 Wola. “Rio’s Pacidication Program.” Disponible en <https://www.wola.org/analysis/rio-de-janeiros-pacification-program/> (acceso en Marzo 12, 2012); para crítica semejante sobre os processos de militarización el el espacio urbano y sinergia entre eventos deportivos y pacificación ver también Vargas (2014) y Malaguti (2009). La Revista Veja, el principal semanal de Brasil, presentó los logros de Medellín en <http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/as-licoos-de-medelin-para-as-upps> (consultado en 05 de febrero, 2014).

20 Hasta porque, como Joy James señala, “la afirmación de Foucault de que el fin de las ejecuciones públicas representa una menor atención a el espectáculo y el cuerpo no tiene en cuenta, como se ejemplifica en suplicios de la pena de muerte, que los cuerpos importan de manera diferente en los sistemas racializados” (James, 1996, p. 34).

Mbembe. *Necropolítica*, en sus palabras, es la relación entre la política y la muerte en “lugares” donde el biopoder falla y los modelos disciplinares no pueden ser impuestos (2003, p.16). De acuerdo con Mbembe, en algunas topografías es la muerte – no la disciplina (el biopoder) – la que define el poder de soberanía: “Si el poder todavía depende de un estricto control sobre los cuerpos (o en concentrarlos en campamentos), las nuevas tecnologías de destrucción están menos preocupadas en inscribir los cuerpos dentro de aparatos disciplinarios que, cuando llegue el momento, inscribirlos dentro del orden de la economía máxima representada ahora por la masacre” (Mbembe, 2003, p.34).

Ahora bien, decir que el Estado gobierna por medio de la muerte puede ser contraproducente y hasta irónico cuando miramos las estrategias de seguridad ciudadana discutidas en la sesión anterior. La verdad, desde el punto de vista de los “ciudadanos de bien” este modelo no es contradictorio con los discursos de paz y orden. Como la selectividad de las prácticas policivas explicita, el Estado de derecho y el régimen de ciudadanía requieren esta estructura antagonica - ciudadanos de bien *versus* agentes del mal; la polis *versus* la favela - para definir los titulares de protección estatal y los enemigos públicos a ser exterminados para el mantenimiento de la ciudad como la comunidad racialmente imaginada. Por eso, la necropolítica, como plantea Mbembe, no es una “antieconomía”, más bien es una relación dialéctica que, en nuestro caso, produce la sinergia racial entre la vida civil de algunos y la muerte biológica de otros. De allí, sugiero el concepto de *gobernanza necropolítica* como una manera de entender la funcionalidad de la violencia estatal para la gestión de la vida urbana en sociedades racialmente estructuradas como el caso de Brasil y Colombia.

Ojalá sea desnecesario enfatizar que cuando estoy hablando de *raza* no evoco la carga biológica al que este concepto nos remite. Tampoco quisiera imponer categorías “contextuales” de relaciones raciales para entender procesos tan complejos como la violencia urbana en dos sociedades distintas como Brasil y Colombia. Estoy consciente de las especificidades locales y de los peligros de reducir la complejidad de fenómenos sociales a categorías académicas que homogenizan las experiencias. Pero quisiera sostener que aunque raza sea una construcción social y aunque esta categoría tal vez opere de manera distinta en distintos contextos, es posible (y urgente) identificar un patrón de dominación urbana que tiene al cuerpo negro y las geografías negras como su blanco principal sea en Brasil, en Colombia, en Estados Unidos o en Sudáfrica. La experiencia negra urbana no ha merecido atención adecuada en América Latina principalmente porque los estudiosos de la cuestión siguen todavía rehenes de un modelo de relaciones raciales que se cree cordial y/o de análisis puramente enfocados en dominación de clase, como si a los pobres les faltasen rostros, color de piel o género. En Brasil, esta dificultad de nombrar el racismo ha sido bien articulada por Florestan Fernandes (1972, p.42) en su famosa frase: “los brasileños tienen prejuicio de tener prejuicio”. Los estudios sobre violencia en Brasil reflejan este prejuicio y esta ambivalencia; aunque hayan ayudado en la comprensión de los patrones de violencia contra poblaciones marginadas, la mayoría de los análisis han sido centrados en los pobres/favelados sin atender a la estructura racial que produce la favela, la marginalidad y la pobreza (e.g., Zaluar 2004; Caldeira, 2000; Misse, 1995).

En Colombia, la dificultad en incorporar el léxico racial en los análisis de la violencia puede ser comprobada en la casi ausencia

de literatura sobre la relación entre criminalidad urbana, violencia y racismo. Hay un sólido campo de investigaciones sobre el impacto del racismo en las dinámicas de los homicidios, del desplazamiento, de la discriminación laboral y de la pobreza (e.g., Urrea and Viáfara, 2010; Galindo, 2003; López, 2008), pero en general los análisis sobre las políticas de seguridad en Colombia siguen en deuda con las cuestiones étnico-raciales y esta deuda es todavía mayor cuando consideramos la violencia urbana (para una crítica, Arocha 1998; Moncada 2010)²¹. Los estudiosos se han olvidado del color de la piel de los que habitan - y resisten en - los territorios urbanos donde el Estado se hace presente meramente por medio de sus atropellos represivos. Cuando aparece, etnicidad/raza es más un adjetivo –una categoría descriptiva - sin consecuencias para un análisis de la estructura racial de la sociedad colombiana y de las concepciones de crimen y de seguridad. Como Eduardo Moncada (2010, p.706) ha señalado, los discursos “de-racializados” sobre la criminalidad urbana no solamente niega el racismo como constituyente de las relaciones sociales en las ciudades colombianas, como también produce políticas públicas de seguridad equivocadas.

La resistencia en llevar raza en serio se contrasta con la “hiper-consciencia racial” (Vargas, 2004) que caracteriza la vida cotidiana en América Latina. Los caleños demuestran una profunda “episteme racial” (Fanón 1967) en sus narrativas del miedo y de la inseguridad urbana. Corroborando con el

21 Con eso no deseo desconsiderar la establecida producción académica sobre las relaciones raciales en Colombia, sino llamar la atención para la poca discusión en ambos contextos sobre el racismo antinegro en la literatura hegemónica sobre la violencia urbana y las estrategias de seguridad.

análisis de Moncada (2010), mi investigación ha identificado un censo-común racial sobre las geografías del crimen que no deja duda sobre la *verdad racial* que orienta el vivir urbano en Cali. Cuando llegué a la ciudad por la primera vez, mis vecinos de condominio se encargaron de brindarme el mapa del miedo: “No te vas a meter en el oriente. Allá es caliente”. “Antes de esta gente venir para Cali, la ciudad era segura, más ahora con todos estos del Chocó y Nariño, la ciudad está sucia e insegura”. “No es prejuicio, pero mira que Cali tiene esta mala fama... porque esa gente viene para ca’ y entonces aumenta la pobreza y la delincuencia.” “El alcalde tendría que enviar esa gente de regreso a sus pueblos. Habría que separar Cali del oriente. Ellos no saben votar, no quieren trabajar...Lo que a ellos les gusta es el corrinche y la rumba”.

Aunque “raza” no aparezca directamente en las narrativas de los sujetos, hay una *episteme racial* que orienta e informa la construcción del peligro y el desorden en la “sucursal del cielo”. Por lo tanto, al considerar “raza” como una categoría orgánica de la gestión del orden urbano, llamo la atención a otros dos aspectos que, sin pretensiones de exhaustividad, juzgo han recibido poca atención de los investigadores de la violencia urbana. Primero, llamo la atención para los regímenes racializados de legalidad, en el cual algunos cuerpos cargan desde siempre las marcas de la sospecha, el peligro, el crimen. Eso equivale a decir que más allá de la crítica marxista del Estado penal como *aparato* de la dominación de clase, la ley y el orden son categorías racializadas que producen ciudadanos y no-ciudadanos, geografías de privilegios y geografías del cárcel. Segundo, resulta inevitable preguntar ¿Qué tipos de subjetividades urbanas son producidas en las intersecciones de cuerpos racializados y geografías criminalizadas?

Quisiera sugerir, entonces, que la violencia policial resulta funcional no solo en términos de garantizar la gobernanza la ciudad neoliberal, como he argumentado, sino también que producen territorios de la diferencia. La paradoja es que el discurso hegemónico que niega la existencia del racismo es desafiado por la imaginación racista de los habitantes de las áreas privilegiadas de la ciudad sobre quien es el delincuente y cuáles son los barrios que ambientan el crimen. Mientras se niega la existencia del racismo, la policía tiene una capacidad asombrosa en identificar quien es afrodescendiente por medio de la violencia selectiva y la muerte.

Al mismo tiempo en que este capítulo propone una crítica radical al modelo normativo de Estado – principalmente considerando los distintos actores disputando la soberanía en los territorios urbanos de Cali y São Paulo; por ejemplo la guerra entre pandillas – mi insistencia en enfatizar el régimen racializado de legalidades tiene una justificativa razonable: el Estado es la figura jurídica por excelencia en la producción de fantasías de paz y orden en el contexto de la seguridad urbana neoliberal²². Es por medio de estas fantasías que busca su legitimidad en territorios en disputas de soberanía; es decir, el Estado construye inimigos urbanos como estrategia de producción de soberanías territorial. El enfoque en el Estado con “E” mayúscula, entonces, busca al mismo tiempo evidenciar la economía de la muerte producida por el Estado aun cuando el Estado no sea el agente directo de la violencia (Nagengast, 1994, p.114), y al mismo tiempo invitar a una reflexión sobre nuestros limitados análisis

22 “Seguridad democrática”, “policía comunitaria”, “estado democrático de derechos” son algunas de las mentiras que el estado cuenta y que necesitan ser creídas para dar razón a su existencia y reproducción. Para un análisis de la reproducción del estado por medio de dichas estrategias, ver (Placencia, 2010).

de las prácticas de resistencia bajo dicho régimen de legalidad²³. Sobre el primer aspecto, el concepto de racismo propuesto por Ruth Gilmore nos ayuda a centralizar el Estado como tecnología de dominación racial: “racismo es la producción extra-legal o patrocinada por el Estado, de patrones diferenciados de vulnerabilidades a muerte prematura” (2007, p.247). En el segundo caso, y no necesariamente contradictorio con el primer aspecto (como desarrollo en la última parte de este capítulo), a pesar de las críticas consolidadas, nosotros los/las científicos sociales seguimos teorizando el Estado como el “tipo-ideal” o el referencial desde donde planteamos las críticas sobre la violencia y las soberanías conflictivas (para una crítica ver Abrams, 1988; Ferguson and Gupta, 2002; Das y Pole, 2004; Ramírez 2011)²⁴.

23 El trabajo de Veena Das y Debora Pole (2004) es bastante enfático en llamar nuestra atención para la permeabilidad del Estado: el Estado es un ser difuso, con múltiples funciones y actores desempeñando sus papeles; sus márgenes son porosas y producidas en los espacios de la vida cotidiana. Eso implica decir que al mismo tiempo que el Estado es ese monstruo penal que muchos de nosotros luchamos en contra, él es también el blanco de las luchas por más educación, más salud, más vivienda... También, hay distintos actores que actúan como el Estado en algunas de las topografías de la violencia que estamos discutiendo aquí (para el caso colombiano ver también Ramírez 2011).

24 Agradezco a Wilmar Martínez por el debate sobre algunos de estos conceptos normativos del Estado en el seminario “Territorio y Sociabilidades Violentas”, Universidad Eafit. Aunque no haya discordancia substancial en nuestras perspectivas, hay que decir que aun que el estado sea un discurso/una representación ideológica, tampoco es productivo desmerecer su “realidad mítica”, como sugiere Abrams (1988). Me parece improductivo y peligroso, desconsiderar el poder de las formas organizadas/legales de violencia bajo el nombre “Estado”. El “estado” no es solamente una representación. Como modelo de organización social, el Estado produce racionalidades y organiza la vida social con resultados crueles en la vida cotidiana de algunas poblaciones. Pienso que es posible provincializar el Estado (reconociendo su ‘realidad histórica’) y al mismo tiempo reconocer su proyecto hegemónico de control social. ÉS en este sentido que discuto algunas formas alternativas de orden político en el ultimo apartado.

En últimas, al posicionarnos desde “dentro” de la ley, hemos no solo reproducido las narrativas del Estado como el parámetro normativo para la construcción de los fuera-de-la-ley, sino también hemos esencializado/ratificado una forma de organización política que es históricamente situada y territorialmente limitada. ¿Cuáles son las implicaciones político-teóricas de estas miradas estadocéntricas? Mientras en el último apartado discuto formas alternativas de orden político, por ahora es necesario entender como su proyecto hegemónico de control social aparece en las estrategias de seguridad urbana en Cali y São Paulo.

Indisciplina Espacial: ¿Quién le para bolas a la policía?

En Cali y en São Paulo, los modelos de policía comunitaria han presentado convergencias no solo en términos de metodologías importadas de otros países, sino también en términos de participación de la comunidad. En mi asistencia a las rendiciones de cuenta mensuales de la policía en El Fundão (Jardim Angela/SP) y en barrios como El Guayacán (Aguablanca/Cali) he identificado una convergencia temática, de gramática racista²⁵ y de perfil de participación. Las reuniones en general

25 La mayoría de los frequentadores de la rendición de cuenta son personas no negras, aun que algunas personas fenotípicamente negras también participan. La ideología racista es reproducida en estos contextos, independientemente del color de la piel. Los discursos raciales de los participantes, las estrategias de la policía y sus frustraciones con los “indisciplinados” del barrio son convergencias que he encontrado en la investigación en ambos contextos etnográficos. He notado la repetición de estos patrones discursivos en palabras como “cancer”, “ratón” y “selvajes” en los encuentros de los consejos de seguridad en São Paulo y en las rendiciones de cuenta en Cali. “El cancer est. comiendo la comunidad”, es una expresión que he

se dan en escuelas públicas donde comerciantes locales, funcionarios de ONGs, miembros de las iglesias y agentes del Estado, se encuentran para discutir los problemas del barrio. En una de estas reuniones en El Guayacán, aproximadamente quince personas se reunieron para oír los logros de la policía en el barrio. Después del himno nacional, los patrulleros exhibieron un video institucional sobre la Policía Nacional y en seguida presentaron la rendición de cuentas en diapositivas. Entonces empezó la cantilena: el patrullero responsable por el evento hizo un reclamo sobre el hecho de que son muy pocas las personas que se interesan por el trabajo de la policía. “¿*Cuántos somos en estos barrios y cuántos están aquí?*” Un señor mayor contestó diciendo que desafortunadamente la delincuencia está dominando a la gente del cuadrante y que “el Estado está perdiendo la guerra para con los malos”. Un policía presentó mapa y una tabla con las detenciones de armas y drogas ilícitas en Aguablanca y pidió que la comunidad ayude a desintegrar a las pandillas informando sus acciones a la policía. “Si la comunidad no ayuda, estos grupos van creciendo, y reproduciéndose como un cáncer. Ayúdenos porque la primera autoridad es el padre de familia. Llame a la policía... hay un muchacho ropa tal, color tal, con un fierro, así...”. Entonces, una señora informante de la policía expresó preocupación por miedo de ser agredida por los miembros de la pandilla que descubrieron su llamada. Asustada pidió protección y denunció que le amenazaron diciendo: “Sapa tiene que morir”. Otro señor intentó calmarla diciendo que hay muchas estrategias para no

encontrado con bastante frecuencia en el consejo de seguridad en São Paulo (Alves, forthcoming).

ser identificado: no decirle a nadie, llamada anónima, solamente dar la dirección. En general, los participantes tenían una actitud cooperativa y hablaban sobre los problemas cotidianos en el barrio: una olla en el vecindario, un vecino que escucha música muy alto, un ex-encarcelado que ha estado rondando la cuadra y metiendo vicios con los niños en la cancha. Como he notado en São Paulo, mientras los frequentadores de los encuentros de rendición de cuenta son los mismos “respetadores de la ley”, “padres de familia”, “ciudadanos de bien”, la mayoría de los residentes de las favelas y barrios marginales mantienen una actitud de indiferencia con las invitaciones de la policía para participar de la gestión de la seguridad en su barrio. Los encuentros de rendición de cuentas son vistos como pérdida de tiempo o como lugar peligroso donde algunos se reúnen para “sapear”. Las similitudes entre São Paulo y Cali en las metodologías del estado y en las respuestas de los residentes es sugestiva de los límites del proyecto de urbanismo neoliberal en la región. Más que acólitos de los grupos “delincuenciales” locales, la valoración que tienen de la policía es basada en sus encuentros diarios con el abandono del estado social y la presencia ostensiva del estado penal. Es también basada en el cálculo político de quien puede protegerlos en sus encuentros cotidianos con la inseguridad urbana. Respuestas registradas en mi diario de investigación con habitantes de El Fundão (São Paulo) y El Guayacán (Cali) sobre la imagen que tienen de la policía incluyen:

No sea tonto, aquí nadie va a la estación de policía a reportar un crimen. Mejor ir hasta los hermanos del PCC. Rapidito ellos resuelven el problema. Este es el barrio más seguro... Cuando la policía no está.

¿Quién carajo va a la policía? ¿Usted va a la policía cuando le pasa algo? Yo no voy. (...) Si usted va a la estación de policía como víctima probablemente te tratarán como un criminal. En cambio, uno va a los hermanos del PCC para resolver el problema y ellos lo resuelven.

No, yo no llamo ningún policía. Yo vengo por ejemplo por ahí por Charco Azul [Aguablanca] y a mí me roban “mi cicla” más adelantico me quedo esperando uno. Subo como dos cuabras y espero, a que venga parando la otra pa’ venirme yo. Me toca... la que, la que venga en esa me vengo. Aquí la ley no existe... Si la Ley no funciona, toca hacerla nosotros mismos

En un nivel, estas frases revelan narrativas conflictivas sobre la legitimidad del Estado como proveedor del orden y la paz en territorios bajo disputas con distintos grupos. En otro, ellas revelan cómo las políticas de seguridad urbana, esencialmente desarrolladas en contra de territorios urbanos racializados, han sido incapaces de “convencer” a los residentes de participar en los regímenes de disciplina espacial emprendidos por el Estado. Aunque mis investigaciones a este respecto todavía sean inconclusas y no me permiten afirmaciones categóricas, mi trabajo etnográfico ha permitido algunas reflexiones sobre la legitimidad de los actores locales en disputa con el Estado por la gestión espacial de estos barrios.

Organizaciones como el PCC (la autodenominada organización criminal que comanda la periferia de São Paulo) y las “pandillas” de las zonas urbanas de Colombia han sido objeto de creciente interés de los investigadores de la violencia urbana. De manera general, los estudios han denunciado las estructuras

paraestatales, los modelos de masculinidad violenta, las lógicas económicas y territoriales los grupos armados, bien como las estrategias de resistencia/negociación con estos grupos (e.g., Arias 2006; Dias, 2009; Gilrado-Ramirez, 2008; Jaramillo, 1993; Benitez, 1993; Alcalá, 2006). La complejidad de estas dinámicas de violencia no me permiten hacer planteamientos categóricos – ¿Como explicar, desde una concepción progresista, el hecho de que muchos de los actores en conflictos urbanos sean jóvenes marginados ellos mismo participando en su marginación y en la vulnerabilidad de las comunidades ya golpeadas por la delincuencia estatal? – pero en apoyo de mis argumentos presentaré algunos puntos que ojalá inviten a una reflexión sobre la *agencia criminal* de jóvenes participantes en algunos de estos grupos.

Por supuesto la llamada criminalidad urbana presenta patrones distintos en Cali y São Paulo no solamente en términos de procesos históricos y proporcionalidad, sino también en términos de la distribución de los grupos organizados en disputa por el territorio urbano. Mientras en São Paulo podemos hablar de un monopolio de la “criminalidad” por el PCC – el Partido controla por lo menos 90% de las favelas y las prisiones del Estado de São Paulo (Dias 2009) -, en Cali podemos hablar de una dinámica pulverizada de la violencia organizada con actores tan dispares como los grupos pandilleros, la delincuencia callejera y las Bacrim. Hasta mismo los “parches” de jóvenes, que en muchos casos son sinónimos de *pandillas*, por veces son simplemente organizaciones efémeras y sin prácticas delictivas mas que el consumo de drogas ilícitas. Reflejan esta dinámica multifacética de la violencia el hecho de que hay en Cali por lo menos 134 pandillas con por lo menos 2,000 jóvenes. Los Urabeños’,

‘Rastrojos’ y la Empresa disputan entre sí la instrumentalización de algunas pandillas, mientras otras mantienen una estructura de relativa autonomía frente a estas organizaciones (HRWatch, 2011; Valencia, 2013)²⁶.

Sin embargo, hay algunas convergencias en las dinámicas espaciales de la violencia y de resistencia en los territorios urbanos de estas dos ciudades. Primero, así como las iglesias, las ONG y el Estado, la criminalidad organizada (por ejemplo las Bacrim y el PCC) buscan atraer a los jóvenes para sus ambiciones políticas y económicas. Estas estructuras delincuenciales no-estatales organizan y dan coherencia, bajo sus autoridades coercitivas, a las prácticas desesperantes y dispersas de jóvenes históricamente excluidos de la ciudad neoliberal. Segundo, aunque la identidad racial no sea el principio asociativo de estos jóvenes, y el racismo raramente aparezca en sus narrativas como “justificativo” de sus actos, el contexto donde actúan es fundamentalmente condicionado por la estructura de privilegios raciales que configura el vivir urbano en Cali y São Paulo. Es decir, aunque *raza* no sea articulada (y en verdad casi nunca aparece) en el léxico político de estos agentes, las vulnerabilidades sociales a que están expuestos los jóvenes marginados del distrito de Aguablanca y de las favelas de Jardim Angela (y sus respuestas) son estructuradas en la tríada raza/clase/espacio urbano.

26 Antropóloga Inge Valencia ha identificado una dinámica semejante en el contexto racializado de Buenaventura, donde distintas organizaciones criminales disputan el monopolio sobre la criminalidad y el tráfico de drogas (Valencia, 2013). También en <http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/informe-exclusivo-urabenos-y-rastrojos-controlan-pandillas-cali> (acceso en Feb 12, 2013).

El PCC divide las favelas entre los “hermanos del crimen”; la mayoría de los “hermanos” en la baja jerarquía de la “organización” es compuesta de jóvenes negros con una historia de judicialización y exclusión de la economía de servicios en que se ha convertido la ciudad de São Paulo²⁷. Las ollas de las favelas brindan oportunidades laborales, respeto y acceso a la sociedad de consumo, negadas por la ciudad neoliberal que les ofrece en cambio un copo en call center o en el MC Donald. En un discurso en audiencia en la Comisión Parlamentaria de Investigación del Crimen Organizado, Marcos Camacho, alias Marcola, el líder máximo del PCC explicó en términos de conflicto de clases, las acciones del Partido²⁸: “Creo que es el siguiente, todos somos hijos de la pobreza, todo somos descendientes de violencia... desde niños somos obligados a vivir en la miseria, la violencia. Así es, en cualquier favela usted va a ver cuerpos todos los días”. Y explicó el porqué de la violencia del Partido: “Porque se acordó, tuvo conocimiento, a la vez, que sus derechos, ya que no había sabido que tenía ciertos derechos, nunca se otorgarían, ¿sabes? Así que fue una manera... un despertar”.

Si en el macro-nivel el PCC es una organización - dominada predominantemente por hombres no negros - que secuestra, extorsiona, y comercializa drogas ilícitas, en el nivel local el Partido da coherencias a las frustraciones de una multitud de jóvenes,

27 En la última década São Paulo ha pasado por una transición estructural de una economía industrial hacia una economía de servicios. Eso ha generado un desempleo estructural principalmente entre los jóvenes negros. Para un análisis del cambio de la base económica paulista, ver por ejemplo Araujo (2001). Sobre el desempleo negro en la región metropolitana de São Paulo, ver Dieese (2011).

28 Transcripción de depoimento a la Comisión Parlamentar de Inquirição/Câmara dos Deputados, Brasília, 08 de Junio de 2006. Disponible en http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/20060708-marcos_camacho.pdf

predominantemente negros, excluidos de derechos básicos y terrorizados por la delincuencia de la policía. Si bien es verdad que “raza” no aparezca en sus discursos, el lenguaje de “clase” y “pobreza” tiene todo que ver con raza en una sociedad donde las zonas de pobreza son predominantemente territorios negros.

En Cali, además del trabajo esporádico en las oficinas de cobro dominadas por las Bacrim, las ollas se convierten en espacios de oportunidad para inclusión en la sociedad de consumo sin pasar por la humillación que sus madres y padres han pasado como empleadas domésticas, colectores de basura etc. Juan, uno de los jóvenes entrevistados en el El Guayacán me dijo sus opciones laborales, después de haber estado en la cárcel por seis meses por atraco en un autobús: vender piña en las calles con su hermana, limpiar los vidrios de los carros en los semáforos o trabajar en la olla. En la olla, otro joven negro Jorge hace mensualmente el equivalente a 3,5 salarios-mínimos vendiendo perico y marihuana, mientras su madre gana mitad del miserable salario mínimo colombiano como diarista en las casas de las elites caleñas. Jorge intentó trabajar con el padre en la construcción civil pero las posibilidades de ganancias mejores y la flexibilidad de horario para el trabajo, fueron más atractivo. Jorge se imagina saliendo de “esta vida” pero solamente si logra “hacer una vuelta grande para ganar mucha plata y ayudar la cucha”.

Excluidos de la ciudad²⁹, estos jóvenes dan sentido a su experiencia urbana por medio de la agencia “criminal” y desafían

29 Las fronteras raciales de la ciudad (en Cali la Avenida Simón Bolívar divide la ciudad en dos y en São Paulo los habitantes de las favelas de la zona sur usan la expresión “da ponte para cá” para referirse a la división entre la ciudad formal y la informal) son desafiadas por jóvenes que, por medio de sus “actos delictivos” en los barrios de clase media y alta, rechazan el confinamiento espacial.

las estrategias de disciplina espacial impuestas por el Estado. Si los referenciales espaciales de la policía son los cuadrantes, sus referenciales son las ollas, los vínculos afectivos con otros residentes, las esquinas donde parchan. Sus prácticas indican que las organizaciones juveniles como las pandillas (Cali) y las células locales del PCC (São Paulo) son mucho más que simplemente un estado paralelo o una delincuencia callejera como ha dicho cierta literatura apresurada. El PCC tiene una estructura política organizada que muchas veces reproduce el orden hegemónico, pero el Partido es también una entidad local autónoma que redefine los términos de la relación entre los jóvenes vistos como enemigo público y el Estado. Del mismo modo, aunque cada vez más los jóvenes de las pandillas estén vinculados a las Bacrim, las pandillas no son simplemente títeres de dichas organizaciones o “negros matones”, como los caracteriza Patrícia, una interlocutora en el sur de Cali. Este paradigma de la reproducción no nos permite pensar más allá del Estado como el referencial de las formas de organización política y legitimidad, además de quitar la autonomía de los sujetos. ¿Cómo podemos interpretar sus asaltos a las instalaciones estatales, el (condenable) asesinato de agentes de policía, el robo de las casas de la élite, la protección de la comunidad, y la venta de drogas en las esquinas? ¿Por qué sus prácticas controversiales reciben resonancia en la comunidad local? Aunque no sean una unanimidad entre los residentes - tampoco es la policía - hay una legitimidad en las acciones de estos actores que todavía sigue sin una comprensión desde la perspectiva de los intelectuales.

El caso del PCC es paradigmático: el Partido garantiza el empleo, la justicia, el orden y la seguridad de los residentes. La reducción en un 70% de la violencia homicida registrada en

São Paulo en los últimos diez años posee relación directa con la consolidación de esta organización en las favelas y en las cárceles, aunque el Estado reivindique para sí la responsabilidad por este logro (ver Dias 2009; Denyer-Willis 2009). Los homicidios en São Paulo no han disminuido más porque la policía mata cada vez más: 1 de cada 5 muertes en São Paulo son cometidas por la policía³⁰. Este fenómeno es tan complejo que hoy en día es la policía – no el PCC – la principal amenaza a los jóvenes negros favelados. La disminución de los robos y atracos en las áreas más pobres también tiene relación directa con el monopolio de la justicia por el PCC. En el contexto de un Estado con baja legitimidad, el Partido encontró terreno fértil para imponer un sistema de justicia controvertido e indefensible, pero también efectivo y legítimo. ¿Por qué no sería legítimo, si atiende a las necesidades cotidianas de los residentes marginados del derecho a la ciudad y terrorizado por la policía?

De la misma manera, en los barrios de Aguablanca los jóvenes pandilleros son respetados no solamente por causa de su arma, sino también por la funcionalidad de la pandilla en administrar el territorio y proveer un cierto orden/estabilidad territorial. Aunque ejerzan un poder coercitivo, hay una autoridad moral que se establece en la disposición en “matar o morir por el barrio”³¹ y en el respeto y protección a los residentes, muchos

30 De acuerdo con la prensa especializada, en 2011, hubo 629 muertes en la ciudad de São Paulo, 128 de ellas fueron cometidas por la policía. Disponible en <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/09/de-cada-5-assassinatos-registrados-na-cidade-de-sp-1-e-de-autoria-da-pm.html>

31 Hay una rica literatura sobre los códigos de honra y la economía moral que se establece entre pandilleros y sus comunidades (e.g., Alves, forthcoming; Ordóñez, 2011; Suarez, 1998).

de ellos sus familiares. El líder de una pandilla en la ladera de Siloé me explicó su autoridad moral, cuando le pregunté si los residentes lo respetaban o temían:

La mayoría me respeta. Es que nosotros ayudamos a la comunidad. Si hay alguien enfermo, que hacemos, llamamos a un taxi y le decimos: “Bajá ahora, llévala al hospital”. Y tiene que llevarla, de gratis. Si llega la policía y va a llevar a uno, la gente se acerca, nos va a llevar a todos. Yo he ganado el respeto porque enfrento, definiendo la comunidad. Un pelado robó la cucha de la tienda y yo tuve que echarlo de acá. ¿Por qué la robó a ella? Tiene que robar donde hay plata, parece... Robar en el sur, en los centros comerciales. Los que están bajo mi sombra que estén bien... si no hago eso perdemos el control y la gente misma empieza a quedar mamada con eso y empieza a buscar su propia ley.

Tal vez eso explique porque los residentes de El Guayacán alimentan narrativas sobre las “temidas” pandillas del vecindario, mientras que las pandillas de la cuadra “no son malas”, son simplemente “los muchachos que no dejan que otros se metan a robar aquí; son ellos que se mantienen pendientes con la policía, con ellos estamos más seguros”. La legitimidad es construida basada en el cálculo político de la protección, en los lazos afectivos, en la identidad barrial. Y esta es la lección aprendida de mis “parceros”: mientras el Estado insiste en la idea equivocada de “resocialización” y promoción de la cohesión social como si los jóvenes “delincuentes” fueran seres de otros planetas, sus prácticas locales muestran que no son anti-sociales, más bien son agentes políticos con legitimidad en sus comunidades y productores de sociabilidades alternativas. Una hipótesis a ser desarrollada es que el enfoque de la re-socialización ha tenido un

impacto muy limitado en la reducción de la llamada “delincuencia” y la violencia, porque no es que la juventud marginada la que ha “fracasado” como seres sociales, sino que sus encuentros con el Estado y la sociedad en gran parte ha sido mediados a través de la violencia. Más allá del mérito sobre sus consecuencias, la violencia es generadora de *sociabilidades* (Silva, 2004).

En el mismo sentido, sus prácticas “delictivas” evidencian un protagonismo político (agencia criminal) que se queda ininteligible desde el marco del régimen de legalidad producido por el Estado y compartido por una tradición intelectual weberiana. Los intercambios entre los residentes de estas áreas y los soldados del PCC o miembros de pandillas, después de todo se basan en más que en el miedo y la coacción. Parece obvio pero nos olvidamos que los actores locales involucrados en las dinámicas de la violencia no son seres de otro planeta. El joven afrodescendiente que vende cocaína en la esquina en la noche es el arquero del equipo de fútbol de la favela en las tardes de domingo. El hijo de doña María, que decidió unirse al Partido después de que la policía mató a su hermano, es el novio de Rute; el muchacho de la pandilla que da plomos a quien se meta a robar en su territorio, es hijo del señor del billar o sobrino de la señora del bingo. Las referencias identitarias van más allá de las etiquetas criminógenas (malo, delincuente, bandido) y enfatizan las relaciones afectivas establecidas en la vida cotidiana en el barrio.

Agencia Trágica

Ahora bien, ¿Cómo podemos mirar las prácticas “criminales” de los jóvenes como un acto político? Si considerarnos sus prácticas como actos de resistencia, la pregunta obvia

sería, ¿Resistencia hacia qué? Si por un lado es visible que las injusticias sociales, la segregación espacial y los modelos predatorios de masculinidad explican mucho de sus prácticas ‘delictivas’ de los jóvenes pandilleros (Ordóñez, 2011; Fefferman, 2006; Salazar, 1990; Benitez, 1993; Rogers 2006), mi mirada va un poco más allá de estas explicaciones, aunque las considere como importantes para la comprensión de este fenómeno social. Propongo el concepto de *agencia trágica* como un intento de entender tanto la subjetividad política constituida en el contexto de la interpelación racial/criminal cotidiana por la policía y los aparatos de seguridad, como también la reproducción de la violencia/ dominación que estos jóvenes establecen en sus comunidades por medio de los comportamientos auto-destructivos y misóginos³². Por lo tanto, aunque nuestras respuestas a qué tipos de cambios estructurales el agenciamiento criminal juvenil genera sean admitidamente provisionales, ellas nos invitan a ser más inquisitivos sobre los lenguajes de la resistencia en contextos saturados por el orden del necropoder estatal. La respuesta parece no estar en la interpretación de las prácticas de estos jóvenes como “bandidismo social”, a pesar de que el PCC, por ejemplo, proporciona la protección social en las favelas de São Paulo y muchos de los grupos pandilleros garantizan un orden político en el microcontexto de Cali. La mirada culturalista que busca entender sus prácticas como afirmación

32 A este respecto ver también el trabajo de Philippe Bourgois sobre el protagonismo criminal de jóvenes Latinos en contexto de pobreza en Central Harlem, Nueva York y Donna Goldstein (2013) sobre las estrategias de resistencia por algunos jóvenes negros participantes del tráfico de drogas en las favelas de Rio de Janeiro.

de una *contra-cultura narco*, una “subcultura de pandilla” (e.g., Salazar 1999; Ordóñez 2011) también se ha mostrado insuficiente para entender esta forma de protesta política. Asimismo, las explicaciones sobre una supuesta “cultura de la violencia” o una “pobreza moral” (lo que en el contexto de nuestras ciudades racialmente divididas se traduce en la ecuación juventud negra = criminalidad) siguen siendo caminos peligrosos para explicar el fenómeno (para una crítica, ver Guemureman, 2007).

Pero tampoco nos ayuda escondernos tras del discurso políticamente correcto e ingenuo de negar la criminalidad juvenil como estrategia de acción política. No es paradójico que en su esquizofrénica perspectiva sobre *raza* – su negación del racismo y su obsesión con la “cultura negra” – la academia (brasileña y colombiana) hayan olvidado el protagonismo criminal de los negros? El “cultural” – la samba, el currulao, el festival Petronio Álvarez, el Carnaval, la capoeira, etc. – es el único recurso político considerado legítimo en la tradición de análisis sobre resistencia negra. Para distanciarse de las narrativas racistas sobre el sujeto “negro delincuente”, la academia borra las subjetividades constituidas fuera de los patrones de moralidad de la sociedad civil blanca. El camino es curioso y explicita la incapacidad de la academia en entender la condición negra: pasamos de la negación de su victimización a la caracterización de las personas negras como víctimas indefensas, resignadas, ingenuas, respetadores de la ley.

Para que no haya duda sobre mi posición frente este tema: Es relativamente un consenso entre los investigadores sociales la asertiva de que no hay correlación directa entre pobreza

y criminalidad urbana. Aunque la violencia estructural crea condiciones para los conflictos sociales, son muy limitadas las explicaciones deterministas que reducen la criminalidad urbana a la lucha de clases; la violencia urbana es un proceso social multi-causal (e.g., Misse 1995; Ortiz, 1992; Tortosa, 1994; Guzmán, Fals Borda & Umaña Luna, 1963; Perlman, 1981). Comparto aspectos de esta tradición, pero así como es importante la desmitificación de la relación pobreza-criminalidad sin negar la rebeldía de los pobres, también lo es una consideración de las prácticas de resistencia desarrolladas por jóvenes racialmente interpelados como criminales. No todos los jóvenes negros y pobres participan en actos delictivos pero algunos lo hacen, y lo hacen porque esta es una posibilidad real de “rechazar la victimización” (Vargas y James 2012) a que están históricamente sometidos. Es como Juan, uno de los jóvenes de La Quinta, en El Guayacán, me ha explicado: *!Hay que ser malo para no sufrir!* Con ocho marcas de balas en el cuerpo y utilizando una bolsa gástrica resultado del último enfrentamiento con la pandilla rival, Juan me llamó al café internet para mostrarme una música del género hip hop con protesta contra el gobierno de su país. Con mi pobre español, pude entender solamente el contexto presentado en la canción: la relación del Estado con los paramilitares, la guerra “gringa” a las drogas y la pobreza en Buenaventura, la principal ciudad portuaria de Colombia. “Pues porque más de uno piensan que lo que uno habla es mentira y, la verdad es que el gobierno es el que tiene a la gente en la ruina”, me explicó. Yo le pregunté si hay un mensaje político en sus “vueltas”: “tal vez sí... usted sabe que nunca faltan los problemas, nunca falta el que salga enojado de la casa y se jue pa’llá y bueno robo y le...

ofendido.... no pues más de uno roba porque está pelao, no tiene plata, necesita plata, no tiene apoyo en la casa... no hay trabajo... no dan trabajo, la situación está brava aquí”.

Los planteamientos de Juan sugieren el uso pragmático de la criminalidad como estrategia de sobrevivencia. Obviamente, la falencia de la economía neoliberal en cumplir con las promesas de acceso universal a los bienes materiales y a los derechos de ciudadanía genera frustraciones entre los jóvenes marginados de la esfera de consumo (e.g., Zaluar, 2004). Otra interpretación posible para sus acciones es mirarlas como manifiesto político. A expresión comun y corriente que Juan repetió - “hay que ser malo para que uno vaya bien”- podría ser entendida como una expresión de la agencia criminal por las cuales algunos sujetos resignifican la interpelación criminalizadora “malos” y construyen una nueva alteridad. Conscientes de la condición subalterna que ocupan en la ciudad, - explotados por los empleadores, golpeados por la policía, y sufriendo la discriminación en los circuitos de consumo - estos jóvenes desafían su condición marginal desafiando la Ley. Mi énfasis en las geografías racializadas tal vez haga sentido ahora: la ciudad se convierte en un sitios de interpelación racial que produce lo que Eliseu, un joven negro cumpliendo pena en el Centro de Detención Provisoria, en São Paulo, llama de “sangre en el razonamiento”: ¿Así que usted piensa que los *ladrones* no tienen sangre en el razonamiento? *¡Yo tengo sangre en el raciocinio!* Estas observaciones sugieren que la dolorosa experiencia de negritud es inherentemente política, no sólo en cuanto al papel de la “raza” como definidora de las jerarquías sociales, sino también en las estrategias de resistencia producidas en el nexo de la estructura racial de la ciudad y la reinención del vivir

urbano para las gentes negras. En este sentido, la identidad juvenil explosiva, constituida en estos encuentros racializados, es una forma política de estar en el mundo anti-negro³³.

Por tanto, parece más teórica y políticamente relevante leer estas prácticas como un rechazo a cumplir con un régimen de legalidad que es definido precisamente en oposición a los cuerpos y territorios racializados. En ese sentido, la criminalidad de estos jóvenes – cuyos cuerpos son por definición marcados como *fuera de la ley* - pude ser vista como una tentativa desesperada de imaginar y reinventar la vida urbana en la ciudad antinegro. Por supuesto, se puede argumentar que destacar la criminalidad de los jóvenes pobres y negros como una “condición de posibilidad” puede reforzar la insidiosa asociación entre raza, pobreza y crimen. Sin embargo, teniendo en cuenta que dicha construcción ya es un hecho en las narrativas hegemónicas de la violencia, puede ser el caso de que la figura temida del “criminal negro” nos ofrezca una manera de pensar la resistencia no en términos de las explicaciones de orientaciones marxistas – las que requieren un agente político actuando dentro de ciertos parámetros de la lucha social -, sino en términos de la negación radical del espacio de la política como hemos entendido hasta ahora.

Si aceptamos la invitación para reconsiderar el campo de la acción política más allá del paradigma contractual/legal de Estado/sociedad civil (Hartman, 1997; Scott 1990), ¿Cómo quedan las producciones académicas que abrazan el Estado como el agente paradigmático del orden, en oposición al cual se constituyen los fuera-de-la-ley? En otras palabras, ¿no sería el caso de que nuestras

33 O en las palabras de David Marriot para un otro contexto, la criminalidad negra es “una manera fatal de estar vivo.” (Marriot, 2006, p.15).

miradas a la criminalidad urbana sean afectadas por nuestra lealtad al Estado, nuestra condición de ciudadanos respetuosos de la ley? En un artículo sobre violencia urbana en Nicaragua, Dennis Rogers invita a los antropólogos a considerar el Estado como una pandilla: como las pandillas, el Estado ha producido cohesión y orden territorial bajo “la capacidad para precipitar repetidamente estados localizados de excepción por medio de incursiones atemorizantes que demuestran simbólicamente su poder arbitrario y refuerzan la separación de la sociedad nicaragüense entre la población de *válidos* y *no válidos*” (Rodgers, 2006, p.325). Aunque su conceptualización de la “gubernamentalidad de la violencia” carece de un análisis del Estado como una tecnología de dominación racial al cual las territorialidades de las pandillas desafían - ella es un llamado a provincializar el “Estado” en nuestros análisis sobre la violencia urbana. El Estado no es nada más que un modelo de organización política históricamente situado (Ferguson y Gupta 2002). Relativizarlo en nuestros análisis no es desconsiderar las violencias perpetradas por múltiples actores en disputas de soberanía³⁴. Las muertes por el PCC en las favelas paulistanas y las interminables guerras entre pandillas en el casco urbano de Cali evidencian el orden necropolítico bajo la cual agentes políticos ejercen la autoridad *de facto*. Sin embargo, aun en estos ámbitos es imperativa una agenda de investigación que considere – como problema político y teórico - otras formas de organizaciones y

34 Admito que la discusión planteada aquí puede fácilmente sugerir un relativismo moral que tiene profundas implicaciones políticas en la vida cotidiana. Del determinismo legal, estaríamos cayendo en un relativismo absoluto que negaría el Estado como agente que garantiza cierta cohesión social. La provocación (admitidamente precaria) es ir más allá del tipo-ideal del estado weberiano y expandir, por lo menos como ejercicio de la imaginación política, las fronteras normativas de los regímenes de legalidad.

otras soberanías territoriales que como el “Estado”, son realidades histórica/políticamente constituidas. ¿Qué tipo de respuestas a la inseguridad urbana podríamos diseñar al considerar las pandillas, por ejemplo, más allá del rótulo normativo de “bandos criminales”? ¿Cómo nuestros análisis serían afectados si relativizamos el paradigma weberiano del monopolio “legítimo” de la violencia y considerarnos las gestiones del orden que se dan fuera de la estructura jurídico-política hegemónica? Porque hemos insistido en la supremacía del Estado como el agente absoluto del orden social, hemos igualmente cerrado posibilidades de aprender como el orden es cuestionado y reinventado por actores al margen de la legalidad (a este propósito ver e.g., Das y Pole, 2004; Ramírez 2011). En últimas, la invitación es a que nuestros análisis relativicen la “ilegitimidad” de las *pandillas* de jóvenes excluidos de la ciudad neoliberal porque sus prácticas son, en últimas, un rechazo a ser gobernados y un diagnóstico de la ilegitimidad del Estado en territorios urbanos donde el Estado significa policía, prisión y muerte.

Bibliografía

- Abrams, P. (1988). Notes on the Difficulty of Studying the State (1977). *Journal of historical sociology*, 1(1), 58-89.
- Alcalá, P. R. (2006). *Jóvenes, memoria y violencia en Medellín: Una antropología del recuerdo y el olvido*. Universidad de Antioquia.
- Alves, J. A (forthcoming). *The Anti-black City: police terror and the struggle for black urban life in Brazil*. Minneapolis, University of Minnesota Press (forthcoming).
- Alves, JA y Vergara, AV. In the Branch of Paradise: geographies of opportunities and social suffering in the city of Santiago de Cali (manuscrito).
- Araujo M F (2001) Reestruturação produtiva e transformações económicas. São Paulo em Perspectiva 15(1):20–30

- Arriagada, I y Godoy, L (1999). Seguridad ciudadana y ciudadanía en América Latina: diagnóstico y políticas en los años 1990. CEPAL: Santiago de Cali. Fals Borda, Orlando. (1986a). *Investigación participativa* (con Carlos R. Brandao), Montevideo, Instituto del Hombre.
- Arocha, Jaime. (1998). Etnia y Guerra: Relación Ausente en los Estudios sobre las Violencias Colombianas, in J. AROCHA, F. CUBIDES, M. JIMENO, *Las violencias: inclusión creciente*, Bogotá: Centro de Estudios Sociales, págs. 205-235.
- Benitez, L. M. (1994). Los jóvenes como protagonistas, en una urbe violenta, Cali, 1993. Cidse-Cinep, Cali.
- Bourgois, P. (2003). *In search of respect: Selling crack in El Barrio* (Vol. 10). Cambridge University Press.
- Caldeiras T. (2000). *City of Walls: Crime, segregation and citizenship in São Paulo*. University of California Press.
- Camacho, Á y Guzmán, Á (1990). *Colombia: ciudad y violencia*. Colombia, Bogotá: Ediciones Foro Nacional.
- Das, V., y Poole, D. (Eds). (2004). *Anthropology in the Margins of the State*. James Currey Publishers.
- Denyer Willis, G. (2009) *Deadly Symbiosis? The PCC, the State and the Institutionalization of Violence in São Paulo*. In G Jones and D Rodgers (eds) *Youth Violence in Latin America*. New York: Palgrave
- Dias, Camila. (2009). Ocupando as brechas do direito formal: o PCC como instância alternativa de resolução de conflicto. *Dilemas*, 2(4), 83-105.
- Dieese, (2011). Mapa da População Negra no Mercado de Trabalho, Sao Paulo. Disponible en <http://www.dieese.org.br/analiseped/2012/2012pedne-grossao.pdf> (consultado en 20 de Junio, de 2013).
- Emplasa. (2010). Jardim Angela: Unidade de Informacoes Territorializadas. Prefeitura de Sao Paulo. Disponible en: <http://200.144.28.146/uits/municipioSP/distritos/PDFs/pdfs/JARDIM%C3%82NGELA.pdf> (acceso en 20 de abril de 2014).
- Fanon Frantz. (1967) *Black Skin White Mask*. New York, NJ: Grove Press.

- Foucault, M. (2007). *Security, Population and Territory: Lectures at the Collège de France*. Palgrave Macmillan, New York.
- Feffermann, Marisa. (2006). *Vidas arriscadas. O cotidiano dos jovens trabalhadores do trafico*. Editoras Vozes: Sao Paulo.
- Fernandes, Florestan. (1972). *O Negro no Mundo dos Brancos*. São Paulo: Difel.
- Ferguson, James and Akhil Gupta. (2002). Spatializing States: Toward an Ethnography of Neoliberal Governmentality. *American Ethnologist* 29(4): 981-1002
- Galdeano A (2009) “Para falar em nome da segurança o que pensam, querem e fazem os representantes dos Conselhos Comunitários de Segurança. Tese de Doutorado.” <http://cutter.unicamp.br/document/?code=000468698> (last accessed 21 August 2013)
- Galindo, D. A. P. (2003). *Mercado laboral y discriminación racial: una aproximación para Cali* (No. 003204). Universidade de los Andes-CEDE.
- Giraldo-Ramírez, J. (2008). Conflicto armado y violencia homicida: el caso de Medellín. *Urvio – Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana*, 5.
- Gilmore R (2007) *Golden Gulag: Prisons, Surplus, Crisis, and Opposition in Globalizing California*. Berkeley: University of California Press
- Goldstein, Donna. (2013). *Laughter out of place: Race, class, violence, and sexuality in a Rio shantytown*. Univ of California Press.
- Guerrero, R. (2003). *Violencia y Exclusión: las experiencias de Cali y Bogotá*. Disponible en <http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd65/GuerreroViolencia.pdf> (acceso en Feb 12, 2013).
- Guemureman, S. (2007). Ni bandas ni pandillas: la miopía de las teorías de las subculturas para explicar la violencia juvenil. *Temas sociológicos*, (11), 153-172.
- Guzmán Campos, G., Fals Borda, O., & Umaña Luna, E. (1963). *La violencia en Colombia: estudio de un proceso social* (Vol. 64). Bogotá.
- Hale, Charles. (2008). “Reflexiones sobre la práctica de una investigación descolonizada”. Nueva Época, Revista del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica.

- Hartman S (1997) *Scenes of Subjection: Terror, Slavery, and Self-making in nineteenth century America*. New York: Oxford University Press.
- INEP. (2013). Informe Estadístico, Mayo 2013. Bogotá.
- HRWatch. (2011). *Herederos de los Paramilitares: la Nueva Cara de la Violencia en Colombia*. Human Rights Watch, Washington DC.
- H R Watch (2009) *Lethal Force: Police Violence and Public Security in Rio de Janeiro and São Paulo*. Washington: Human Rights Watch
- Janoschka, Michael. (2011). Geografías urbanas en la era del neoliberalismo. Una conceptualización de la resistencia local a través de la participación y la ciudadanía urbana. *Investigaciones geográficas*, (76), 118-132.
- James, Joy. (1996). *Resisting State Violence: Radicalism, Gender, and Race in U.S. Culture*. Minneapolis, University of Minnesota Press.
- Jaramillo, Ana María. (1993). Milicias populares en Medellín: entre lo privado y lo público. *Revista Foro* (22) pp. 25-37.
- Lemke, T. (2001). The birth of biopolitics: Michael's Foucault's lecture at the College de France on neo-liberal governmentality. *Economy and Society*, 30, 190-207.
- López, C. A. V. (2008). Cambio estructural y estratificación social entre grupos raciales en la ciudad de Cali-Colombia. *Revista Sociedad y Economía*, (15), 103-122.
- Malaguti, Vera (2009). O Alemão é Mais Complexo. "O Alemão é muito mais complexo." *Revista Justiça e Sistema Criminal* 1(1): 103-125.
- Marriot, David (2006). *On Black Men*. New York: Columbia University Press.
- Mbembe, A. (2003). "Necropolitics". *Public Culture*, Duke, 15(1): pp. 11-40.
- Mesquita Neto P (1999) Policiamento Comunitário: A experiência em São Paulo. *Revista Brasileira de Ciências Criminais* 7(25):281-292
- Mendoza, Carlos. (2013). La (in)seguridad urbana en Barranquilla: ¿miedo real o imaginario? In, *Violencia urbana: radiografía de una región*. Fecol, Bogotá.
- Misse, M. (1995). Crime e pobreza: velhos enfoques, novos problemas. *O Brasil na virada do século. Rio de Janeiro: Relume-Dumará*.

- Moncada, E. (2010). Counting bodies: crime mapping, policing and race in Colombia. *Ethnic and Racial Studies*, (10): vol.33, n.4, pp.696-716.
- Morales, M. R. (2010). La invisibilidad estadística étnico-racial negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en Colombia. *Trabajo Social* N.º 12, pp. 89-99
- Nagengast, C. (1994). Violence, Terror, and the Crisis of the State. *Annual Review of Anthropology*, 23(1), 109-136.
- Observatorio Social. (2011). Violencia, convivencia y dinámica social en Cali: lectura desde el Observatorio Social. Alcaldía de Santiago de Cali.
- Ordóñez, J. (2011). Honor y masculinidad en la vida pandillera. In *Memoorias X Congreso Nacional de Sociología*, pp. 2323-2350.
- Ortiz, Carlos Miguel (1992) “Los estudios sobre la violencia en las tres últimas décadas”, en *Boletín Socioeconómico* no. 24/25: 45-76, Cidse-Universidad del Valle, Cali.
- Perlman, J. E. (1981). *O mito da marginalidade: favelas e política no Rio de Janeiro*. Paz e Terra.
- Personaría de Cali. (2014). Villahermosa no es villa y mucho menos hermosa. Comunicación pública. Disponible en <http://www.personeria-cali.gov.co/actualidad/prensa/1573-villahermosa-no-es-villa-y-mucho-menos-hermosa#.U2QdINhVWm8> (consultado en 10 de abril de 2014).
- Placencia, L. G. La concepción sistémica de la seguridad pública en México. *Nueva Sociedad*, n. 167, p.88-98.
- Policía Nacional. (2010). Estrategia institucional para la seguridad ciudadana: Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC). Imprenta Nacional de Colombia, Bogotá. Disponible en <http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/HOME/Lineamientos/TOMO%202.2.%20Seguridad%20Ciudadana.pdf> (consultado en 20 de abril de 2014).
- PNUD. (2013). Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Washington.

- Ramírez, L. y Rodríguez, J. (2013). Una comisión de la verdad en el modelo colombiano de justicia transicional: aproximación a través de la historia reciente y la experiencia comparada. Manizales, Colombia: Jurídicas. Universidad de Caldas. 10(2), 40-60.
- Ramírez, M. C. (2011). *Between the guerrillas and the state: the cocalero movement, citizenship, and identity in the Colombian Amazon*. Duke University Press.
- Rodgers, D. (2006). The State as a Gang: Conceptualizing the Governmentality of Violence in Contemporary Nicaragua. *Critique of Anthropology*, 26(3), 315-330.
- Rojas, Carlos Eduardo. (1994). "La Violencia Llamada Limpieza Social". Colección Papeles de Paz. CINEP: Bogota.
- Rose, Nicolas. (1999). *Power and Freedom: Reframing Political Thought*. Cambridge University Press.
- Salazar, Alonso. (1990). No nacimos pa'semilla. *La cultura de las bandas juveniles en Medellín*. Corporacion Region, Medellín.
- Speed, Shannon. (2006). Entre la antropología y los derechos humanos Hacia una investigación activista y comprometida críticamente *Alteridades*, vol. 16, núm. 31, pp. 73-85.
- Scott J (1990) *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Silva, L. A. M. (2004). Sociabilidade violenta: por uma interpretação da criminalidade contemporânea no Brasil urbano. *Sociedade e estado*, 19(1), 53-84.
- Sinhoretto, J. (2002). Os justiceiros e sua justica. Linchamentos, costumes e conflito. São Paulo: IBCCrim.
- Suarez, Carlos. (1998). En algún lugar parcharemos. Observatorio de Cultura Urbana. TM Editores, Bogotá.
- Theodore, Nike et al. (2009). "Urbanismo neoliberal: la ciudad y el imperio de los mercados." *Temas sociales* 66: 1-11.
- Tortosa, J. (1994). Violencia y pobreza: una relación estrecha. en Papeles nº 50; 1994, pp. 31-38.
- Urrea, Fernando y Quintín, Pedro. (2001). "Segregación urbana y violencia en Cali: los jóvenes del Distrito de Aguablanca. *Anuario de Investigaciones del CIDSE*, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Universidad del Valle.

- Urrea, F and Viafara, C (2010) Heterogeneidades sociodemográficas y socioeconómicas y dimensiones étnico-raciales en Colombia. *Debates sobre ciudadanía y políticas raciales en las Americas Negras*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Urrea-Giraldo, F (2012). Race, Ethnicity, Crime and Criminal Justice in Colombia. In: A Kalunta-Crumpton (ed.) *Race, Ethnicity, Crime and Criminal Justice in the Americas*, Asgate, London.
- Valencia, Inge. (2013). Entre el business y las vueltas: narcotráfico y sociabilidades en regiones de frontera en Colombia. *Boletín Polis*. Universidad Icesi.
- Vanegas, Gildardo. (1998). *Cali, Tras el Rostro Oculito de las Violencias*. Instituto Cisalva, Universidad del Valle.
- Vargas J and James J (2012) Refusing Blackness-as-Victimization: Trayvon Martin and the Black Cyborgs. In Yancy, G., & Jones, J. (Eds.). *Pursuing Trayvon Martin: historical contexts and contemporary manifestations of racial dynamics*. Rowman & Littlefield.
- Vargas, J. (2014) Taking Back the Land: Police Operations and Sport Megaevents in Rio de Janeiro. *Soul*, Vol. 15, Iss. 4, p. 275-303.
- Vargas, J. H. (2004). Hyperconsciousness of race and its negation: The dialectic of white supremacy in Brazil. *Identities: Global Studies in Culture and Power*, 11(4), 443-470.
- Wilson, D. (2004), "Toward a contingent urban neoliberalism", *Urban Geography*, no. 25, pp. 771-783
- Zaluar, Alba. (2004). *Integração perversa: pobreza e tráfico de drogas*. Rio de Janeiro: FGV Editora.